

Estadios Unidos ante la tentación hegemónica

HENRY RAYMONT

Washington. En este periodo de incertidumbre y de replanteamientos del orden internacional, el trato de Estados Unidos para con Latinoamérica pasa por una dramática disyuntiva: o se recupera la "relación especial" que se tenía con la región antes de la *guerra fría* dentro de un contexto de cooperación y respeto mutuo, o se entra en una política hegemónica basada en el derecho de ser una superpotencia sin rival.

Cuál de los dos caminos emprenderá el gobierno de Bill Clinton dependerá en gran medida de la realidad del país, porque la política exterior nunca puede separarse de la situación interna; una nutre a la otra. Por eso la manera en que el gobierno de Estados Unidos se conduzca en Latinoamérica estará profundamente ligada a cómo se conduce con sus propios ciudadanos, o sea, si logra mejorar las deterioradas condiciones económicas y sociales de la nación.

La primera opción se remonta a la conciencia política y pluralista que el presidente Franklin Delano Roosevelt puso en práctica con su política del *Buen vecino* hace cuatro décadas este mes. La segunda se remonta al espíritu hegemónico del *Destino manifiesto* que floreció con el otro Teodoro Roosevelt a comienzos del siglo.

Lo peligroso para América Latina es que por el momento la balanza parece inclinarse a favor de la segunda opción. Sólo que con Clinton puede estar mediatizada por un idealismo como el de Woodrow Wilson, quien predicaba que era el deber de Estados Unidos "enseñar" a los otros pueblos americanos a "elegir buenos gobernantes". Lo curioso del presidente Wilson fue que a la vez se constituyó en un gran defensor del derecho de autodeterminación de los pueblos y del mecanismo jurídico creado con ese fin, la Liga de las Naciones. Si no logró su propósito fue porque no pudo convencer a su propio pueblo, el que, terminada la Primera Guerra Mundial, ansiaba por desatenderse del resto del mundo.

El nuevo equipo en Washington considera que el pueblo estadounidense pasa por un estado de ánimo bastante parecido al de entonces. Por eso Clinton se ha volcado a promover, en lo interno, su programa de reformas económicas y sociales, mientras en el campo internacional se mueve con suma cautela. En la práctica no ha hecho cambios significativos a la política exterior trazada por Bush, como lo demuestran el estado del Tratado de Libre Comercio, Haití y Cuba. Eso no quiere decir que la política exterior está

paralizada, como lo demostró con el nuevo activismo que le imprimió a la participación de Estados Unidos en la crisis de Bosnia-Herzegovina. Tampoco se descarta la posibilidad de adoptar medidas más severas si los militares haitianos continúan bloqueando el regreso del poder civil.

Hoy el impulso intervencionista regresa acompañado por el propósito de "proteger los derechos humanos" y "promover la democracia". También viene revestido por el manto de la acción colectiva, de un supuesto afán de reforzar los mecanismos de la Organización de Estados Americanos (OEA). En concreto la concertación colectiva ha sido notablemente ambigua por parte de Washington, como se puede constatar en el trágico caso de Haití. Por un lado, el representante de Estados Unidos ante la OEA, el embajador Luigi Einaudi, condena enérgicamente el golpe militar, exige la imposición de sanciones económicas y el regreso del presidente Jean Bertrand Aristide. Por otro lado, Estados Unidos, sin consultarlo con la OEA o con Einaudi, permitió que se hicieran excepciones en las sanciones contra Haití apenas se alzaron las protestas de ciertas empresas privadas. También es un secreto a voces que importantes fuerzas dentro y fuera del gobierno -incluso parece que del ex presidente Jimmy Cárter- creen que Aristide no es el líder apropiado para traer paz y prosperidad a su sufrido país, y no les importa que haya sido elegido por casi el 70 por ciento de los votantes haitianos. O sea que, al final de cuentas, Washington determina quién es un "buen gobernante".

Entonces ¿qué puede hacer un presidente que en su campaña electoral calificaba la política de Bush hacia Haití como "insensata" y "cruel" para contrarrestar la acusación de que él es igualmente insensible además de inconsistente? Una opción es embarcarse en alguna nueva tesis que los ideólogos y expertos en relaciones internacionales inventan, con la esperanza de que el gobernante en turno la haga popular. Así, la tesis de los llamados "neo-conservadores" de que un creciente peligro comunista se cernía sobre Occidente, sirvió de pretexto a Reagan para apoyar a los militares latinoamericanos con el argumento de que era necesario resguardar la seguridad de la región. Con el mismo razonamiento lograron un astronómico incremento del presupuesto para armamentos, cuando de hecho el bloque soviético ya se tambaleaba. Hoy, varios de estos apóstoles de la *guerra fría* se han plegado al campo demócrata para impulsar con igual ahínco la campaña para "promover la democracia", con el uso de los *marines* si fuera necesario.

En este contexto se asoma ahora un nuevo y alarmante planteamiento que pone en entredicho los principios de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía como preceptos rectores del sistema mundial, pero muy especialmente para el interamericano.

Más y más se argumenta que hay que olvidarse de la soberanía cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, especialmente en el caso de Cuba. Más y más se pone de moda el novedoso concepto del deber de intervenir cuando se trata de un "fallido Estado nacional". Típico de este planteamiento es la definición del "Estado fallido" de Gerald B. Helman, ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, como "un país que es absolutamente incapaz de mantener su posición como un miembro de la comunidad internacional". Se refiere a países como Haití, Somalia y Cambodia. Con tono de reproche, Helman explica que en la Carta de las Naciones Unidas "se le acordó más atención a la autodeterminación que a la capacidad de supervivencia de los pueblos a largo plazo".

En connotado sociólogo Amitai Etzioni agrega su voz en un artículo titulado "Los males de la autodeterminación", en el número de invierno de la revista *Foreign Policy* publicada por el influyente Carnegie Endowment for International Peace. Etzioni reconoce que históricamente el movimiento hacia la autodeterminación "sirvió bien a aquellos que quisieron disolver a los imperios". Anota sin embargo que esos movimientos por lo general "han perdido su legitimidad como vías para la creación de fuertes Estados democráticos". Agrega: "La autodeterminación es un vehículo para llevar justicia al mundo a través de gobiernos soberanos. Sin embargo, a pesar de su papel positivo en periodos anteriores, su legitimidad ha sido gravemente erosionada por la violencia, la destrucción, y hasta la guerra que ahora incita".

Cuando dos instituciones como el Council of Foreign Relations y el Carnegie Endowment comienzan a difundir planteamientos con estos, algo pasa. Varios historiadores y politólogos, incluso el autor de *best-sellers* como Kennedy, que proponen un reordenamiento de los principios que guían a la comunidad internacional, también cuestionan la inviolabilidad de los tradicionales conceptos que rigen el sistema jurídico internacional.

Lo que pasa es que los brotes de violencia y desorden que surgieron después de la desintegración del bloque soviético han sembrado confusión y desconcierto en el momento preciso en que tanto Occidente como los países socialistas comienzan a despojarse de las certezas ideológicas y estratégicas que los tuvieron encerrados en sí mismos durante la *guerra fría*. Quizás eso explica en alguna medida los brotes de nostalgia que algunos politólogos estadounidenses sienten por *ese fin de siècle* cuando Estados Unidos con su "Manifest Destiny" se autonombraba policía, no todavía del mundo, pero por lo menos de sus vecinos del Sur. Eso fue a fines del siglo pasado y este es

otro mundo.

Este debiera ser el momento para recordar excepciones como la de Franklin Roosevelt, que rechazó el intervencionismo unilateral en favor de una mayor cordialidad y cooperación entre las repúblicas americanas como modelo para una organización mundial basada en el respeto por la ley y la libre voluntad de los pueblos, y capaz de movilizar sus recursos colectivos ante cualquier amenaza contra la paz.

Ahora se pretende extender ese concepto en defensa de la democracia y los derechos humanos, tanto en Naciones Unidas como en la OEA. Lo que no se ha destacado suficientemente es una crítica diferencia jurídica y política entre los dos organismos: el hecho de que mientras cinco grandes potencias tienen el poder de veto para controlar las decisiones del Consejo de Seguridad, en la OEA rige la igualdad jurídica donde la nación más pequeña tiene el mismo voto que las grandes. Parecería que esa discrepancia fundamental no fue tomada en cuenta en el momento en que Naciones Unidas entró a participar en los procesos de paz centroamericanos y la crisis haitiana, por considerarse que la OEA carecía de recursos y efectividad. Entonces los gobiernos en vez de enfrentar el reto de fortalecer al organismo regional, optaron por apelar a la ONU sin resolver el problema de fondo.

Resumiendo, la situación actual presenta una importante interrogante que conlleva la preeminencia de Estados Unidos en el concierto mundial y regional. "Si el análisis histórico del Destino Manifiesto nos enseña algo -escribió el politólogo inglés Harold Laski en 1947- es el poder casi ilimitado de la mente humana de confundir lo que debe hacer con lo que quiere hacer, de proteger, con toda sinceridad, con el manto de la ética a la desnudez del deseo". El peligro inherente en una situación en que Estados Unidos se presenta sin rival en la balanza de poder, es el resurgimiento de la tentación de jugar un papel hegemónico. Por eso hoy más que nunca postular el antecedente más equilibrado de la política hemisférica de Franklin Roosevelt y el principio de la no intervención, no es nostalgia sino postular el modelo de una política de sentido común.

Mucho dependerá de si Clinton logra mejorar los niveles económicos y establecer un equilibrio satisfactorio en las relaciones sociales. Si no, entonces el país nuevamente se enfrentará con la tentación de distraerse con el acecho de "ideas foráneas" como el origen de sus problemas internos. Dicen los economistas que no hay nada más peligroso que una nación que tiene abundantes recursos pero que carece de la habilidad de usarlos con sabiduría, que invariablemente es la característica de un gobierno débil.

Aquí está el gran reto que enfrenta el gobierno de Clinton: lograr el bienestar

doméstico para desarrollar una política exterior a la vez generosa y práctica. Si no, corre el peligro de querer imponer en Managua y Guatemala las reformas que no acierta a desarrollar en Los Angeles y el Distrito de Columbia.

Para alcanzar sus objetivos Clinton debe demostrar un liderazgo capaz de convencer al pueblo que para convivir en paz debe resolver sus propios problemas y a la vez sentirse identificado con las necesidades de sus vecinos. Eso lo hizo Lincoln después de la Guerra Civil, y Roosevelt después de la Gran Depresión. Clinton debe adoptar el modelo donde un gran presidente pudo movilizar la opinión pública para alcanzar grandes objetivos. Pero en los casos de Lincoln y Roosevelt el esfuerzo vino después de dos grandes crisis. La incógnita está en si Clinton también necesitará una gran crisis para poner en movimiento a su pueblo, y si esa crisis no se manifiesta en Cuba, igual a como se perfiló en 1933 para presentarle a Roosevelt el primer reto a su política del *Buen vecino*. Pero ese es tema para otra colaboración.